

se violó la garantía consignada en el artículo 14 de la Constitución federal. Por lo expuesto, y de conformidad con lo que previene el artículo 101 de la misma Constitución, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 11 de este mes de Febrero, por el Juez de Distrito del Estado de México, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los quejosos Pascual Valdés y Valentín Piña contra el acto del Gefe Político del Distrito de Toluca que los condenó á sufrir la pena de muerte.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez de Distrito del Estado de México, con copia certificada de este auto, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arienga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido ante el Juzgado del Distrito del Estado de Hidalgo por Benito H. Ayala, solicitando ser puesto en libertad conforme á la ley de amnistía.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez:

El Promotor dice: Que el ciudadano Benito H. Ayala se ha presentado al Juzga-

do interponiendo recurso de amparo, porque en su persona juzga violadas las garantías que otorga la Constitución en la fracción 1ª del artículo 85, y los artículos 1º y 3º de la ley de amnistía, porque estando extinguiendo la pena de diez años de presidio en que le conmutó la de muerte la Legislatura del Estado de Hidalgo, y á que fué condenado por juzgarlo inodado en el movimiento habido en Pachuca el 8 de Marzo último, no se le ha puesto en libertad según lo prevenido por la ley de amnistía. Pedido el informe respectivo al ciudadano comandante militar, lo ha evacuado manifestando, que el ciudadano Ayala se encuentra preso por haberlo remitido el ciudadano Gobernador del Estado de Hidalgo, para que se mandara á Acapulco á extinguir la pena de diez años de presidio que le impuso la Legislatura de este Estado al indultarlo de la pena de muerte. Como no consta que esa pena fué impuesta al reo por delito político, que es el caso que comprende la ley de amnistía, ó por otro delito, para esclarecerlo puede el Juzgado mandar se reciba á prueba el juicio por el término de la ley.

México, Octubre treinta y uno de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Herrera Campos.*

Sentencia del Juez de Distrito.

México, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta.

Visto el juicio de amparo seguido ante este Juzgado primero de Distrito, en virtud de la solicitud de Benito H. Ayala; vistas las diligencias practicadas, las pruebas rendidas y lo alegado por su defensor, y visto cuanto se ha tenido presente para su resolución, y considerando: que Ayala al pretender el amparo manifiesta: que fué juzgado por el ciudadano Gefe Político de Pachuca, por el movimiento revolucionario ocurrido en dicho lugar el día 8 de Marzo de este año, y al ser sentenciado se le condenó á la última pena, la que le fué comu-

tada, por la Legislatura del Estado, en diez años de presidio; que el delito por el que se le juzgó, fué absoluta y exclusivamente político, por lo que está comprendido en el artículo 1º de la ley de amnistía, y que con fundamento del artículo 5º, y por lo dicho, esperaba ser puesto en libertad por el ciudadano Comandante Militar, como lo solicitó, pero que no habiéndolo hecho, cree que se han violado los artículos 1º y 5º de la ley de 14 de Octubre de este año y las garantías que concede la fracción 1ª del artículo 85 de la Constitución federal, por todo lo cual pide amparo. Considerando: que pasada la solicitud al ciudadano Comandante Militar para que informara, expuso: que desde el 25 de Abril de este año, Ayala se encontraba en la cárcel sin conocimiento de la Comandancia; que por orden del Ministerio de la Guerra, de esa fecha, se puso á Ayala á disposición del ciudadano Gobernador del Estado de Hidalgo, quien acusó recibo; y que dicho ciudadano Gobernador puso al mencionado Ayala, con fecha 26 de Junio de este mismo año, á disposición de la Comandancia, para que en la primera oportunidad fuera remitido á Acapulco para que compurgara la pena de diez años de presidio, por lo que la Comandancia no tenía que ver con la pretensión de Ayala. Considerando: que impuesto el ciudadano Promotor, de los autos, dijo: que no constando si la pena que se le aplicó á Ayala fué por delito político, que es el caso que comprende la ley de amnistía, pidió que el negocio se recibiera á prueba para esclarecer los hechos, y así se pudiera saber si había lugar al amparo. Considerando, que recibida la prueba resultó: que Ayala tomó parte en el movimiento revolucionario verificado el día 8 de Marzo de este año en la ciudad de Pachuca: que su conducta siempre ha sido buena: que no se ha sabido que haya cometido el delito de robo ó plagio y que ha prestado servicios á la causa de la libertad. Considerando: que pedida la causa al Cefe Político de Pachuca no la ha remitido, siendo su vista muy

necesaria para conocer el delito por el cual fué juzgado, los cargos que se le hicieron y la pena que se le impuso, pues su defensor asegura que fué encausado conforme á las leyes de 11 y 13 de Abril de 68. Considerando: que si se hubiera justificado que el delito fué político, por la solicitud del reo y por el informe del ciudadano Comandante Militar, consta que Ayala está en la cárcel por orden del ciudadano Gobernador del Estado de Hidalgo, para que marche á Acapulco á extinguir su condena, de lo que se infiere, que á quien debe ocurrir para ser puesto en libertad es al dicho ciudadano Gobernador. Considerando: que Ayala cree que se han violado en su persona las garantías que otorga la fracción 1ª del artículo 85 de la Constitución, cuyo artículo habla de las facultades y obligaciones del ciudadano Presidente de la República, y por lo mismo, en este caso es inconducente. Y considerando: que estando de manifiesto estos autos en la secretaría de este Juzgado, para que las partes tomaran sus apuntes y alegaran, el ciudadano promotor no pidió ni en pró ni en contra del reo; con arreglo á lo expuesto, á los artículos 101 y 102 de la Constitución federal de la República y al tenor de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que la Justicia federal no ampara al reo Benito H. Ayala, por no haber sido puesto en libertad por el ciudadano Comandante Militar del Distrito, imponiéndosele el minimum de la multa que designa la ley citada.

Ilágase saber; sáquese copia de esta sentencia para que se publique en el "Diario Oficial," y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo mandó y firmó el ciudadano Juez 1º de Distrito, Lc. José I. Sancha: doy fé.—(Firmados.)—*J. I. Sancha.—Joaquín Sánchez Gonzalez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte.

México, Febrero veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 26 de Octubre próximo anterior promovió ante el Juez 1º de Distrito de esta capital, Benito H. Ayala, preso en la cárcel nacional, alegando: Que juzgado y sentenciado á muerte por el Gefe Político de Pachuca, suponiéndosele inodado en el movimiento revolucionario ocurrido en aquel lugar el 8 de Marzo del mismo año, la Legislatura de Hidalgo le había conmutado la pena en la de diez años de presidio; que siendo el delito por el que se le juzgó, exclusivamente político, estaba comprendido en el artículo 1º de la ley de amnistía, fecha 14 de Octubre mencionado, y en consecuencia, con arreglo al artículo 5º de esta disposición esperaba ser puesto en libertad; que no habiéndosele concedido esto por el Comandante Militar, no obstante que lo solicitó, la continuación de la prision violaba en su persona los artículos citados de esa ley y la garantía que otorga la fracción 1ª del artículo 85 de la Constitución de la República, y que en esa virtud, pedía el amparo respectivo: visto el informe del Comandante Militar contra quien se dirige la queja, manifestando que Ayala había sido puesto á su disposición por el Gobernador de Hidalgo, para que en la primera oportunidad fuera remitido á Acapulco, sentenciado á la pena de presidio en que le conmutó la Legislatura del Estado la de muerte; el pedimento del Promotor Fiscal, en que para esclarecer si el delito porque se impuso la pena había sido político, promueve prueba; la rendida por el quejoso; el alegato que ha producido su defensor y la sentencia del Juez 1º de Distrito negando el amparo: vista la causa que instruyó á Benito H. Ayala la Gefatura Política de Pachuca, y el decreto de la Legislatura aludido en este juicio, documentos que se han traído á la presencia de esta Corte Suprema de Justicia por su auto de 3 de Enero pró-

ximo pasado; y atenta, por último, la aclaración que arreglado á ese auto hizo el quejoso, señalando como garantía violada la que comprende el artículo 18 de la Constitución federal, una vez que la fracción 1ª del artículo 85 que citó trata de las facultades del Presidente de la República. Considerando: que según la causa formada por la Gefatura Política de Pachuca á Benito H. Ayala, el delito porque á este se juzgó y condenó á la pena que al fin ha venido á ser de presidio, fué el de salteador en gavilla, siguiendo lo prevenido por las leyes de 18 de Abril de 1869, y 9 de igual mes de 1870, cuyo delito no es del orden político, ni por lo mismo de los comprendidos en la ley de amnistía que Ayala invoca al fundar el amparo que pretende; y que en tal concepto, no procede para él la libertad que esta ley da, y falta la violación de garantía que ha reclamado. Por las razones expuestas y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez 1º de Distrito de México, pronunciada en 19 de Diciembre último, en la parte que dice: que la Justicia federal no ampara al reo Benito H. Ayala, por no haber sido puesto en libertad por el ciudadano Comandante militar del Distrito.

Devuélvanse sus actuaciones al mismo Juez con testimonio de este fallo; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.) S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias. México, Marzo primero de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.